

COOPERATIVISMO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E AUTOGESTÃO

**ECONOMÍA SOLIDARIA, FORMAS DE PROPIEDAD COLECTIVA,
NACIONALIZACIONES, EMPRESAS SOCIALISTAS, CO- Y AUTOGESTIÓN
EN VENEZUELA**

*THE SOLIDARITY ECONOMY, COLLECTIVE FORMS OF OWNERSHIP,
EXPROPRIATION AND WORKERS CO- AND SELF-MANAGEMENT IN
VENEZUELA*

Dario AZZELLINI ¹

RESUMÉN: El presente ensayo resume y analiza los diferentes esfuerzos organizacionales del gobierno bolivariano de Venezuela de alcanzar una democratización de la propiedad y administración de los medios de producción. Las diferentes iniciativas y medidas adoptadas desde el 2000 – primero reforzar el cooperativismos, luego la creación de Empresas de Producción Social (EPS) y finalmente las Empresas Socialistas, como también el concepto del desarrollo endógeno, orientación normativa de la organización productiva y de los programas estatales de formación laboral, son presentados y analizados con visión crítica. En respecto a la organización interna de lugares de producción se hace un análisis crítico de los modelos de cogestión, autogestión y control obrero mirando los logros y las fallas recurriendo a trabajo de campo hecho en tres fábricas: La fábrica de aluminio Alcasa; la papelera Invepal y la fábrica de válvulas Inveval.

PALABRAS-CLAVE: economía solidaria; autogestión; Venezuela.

INTRODUCCIÓN

El gobierno bolivariano siguiendo el mandato de una amplia mayoría del pueblo, se plantea la transformación social y económica del país. Se intenta diversificar la economía fuertemente dependiente del petróleo; fomentar los recursos aguas abajo; democratizar la producción y la tenencia de los medios de producción, así como, transformarla en formas colectivas de propiedad y de administración, las ideas del desarrollo sustentable sirven como guía a ese proceso.

¹ Politólogo y documentalista, es miembro del consejo editorial de Workingc USA. The Journal of Labor and Society y de la International Encyclopedia of Revolution and Protest. 1500 to the Present, Caracas, Venezuela. Hace doctorado en la Universidad Wolfgang Goethe de Frankfurt, en Alemania y en la BUAP de Puebla, México - dnapress@gmx.net

del Pueblo Soberano) y de otras instituciones de financiamiento. Las cooperativas pequeñas pueden incluso conseguir préstamos exentos de intereses. En el 2006 se otorgaron más de 150.000 préstamos (no sólo a las cooperativas).

Estas condiciones favorables condujeron a un boom de inscripción de cooperativas. Ya para finales de 2008, según la Suprntendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) había 262.904 cooperativas registradas. Pero según la evaluación y fiscalización de Sunacoop sólo aproximadamente 70.000 eran operativas y recibieron el certificado de cumplimiento para poder actuar legalmente. De hecho muchas de las cooperativas nunca funcionaron, fueron simplemente registradas porque eso no implicaba gastos; otras, son empresas de propiedad individual, principalmente familiar; registradas formalmente como cooperativas para acceder a las condiciones favorables del financiamiento y estar exentas de pagos de impuestos. Otras más sólo existieron en el papel y hubo malversación de los fondos.

El 49.38% de las cooperativas trabajan en el sector de servicios, principalmente turismo, servicios a empresas, limpieza, mantenimiento industrial y peluquerías. Un 25.3% son cooperativas productivas, principalmente en el sector de la agricultura, ganadería, pesca, manufactura e industria. Otro 11,48% corresponde a cooperativas de transporte y 7.64% a bancos comunales (SUNACOO, 2008).

Una revisión por parte de *Sunacoop* en agosto de 2005 de las cooperativas que no surgieron de la *Misión Vuelvan Caras* reveló que, de 1,500 cooperativas controladas, 628 presentaron errores formales; en 100 de los casos las fallas eran tan serias que se adoptaron sanciones. A 20 cooperativas se les bloqueó el acceso a sus cuentas bancarias y a otras 30 se les anuló la autorización para firmar acuerdos libres de impuestos con el Estado. Tres grandes cooperativas del sector carbonífero del Zulia servían exclusivamente a enriquecimiento (enriquecimiento) personal y la explotación de terceros. Se les revocó la certificación y tuvieron que presentar pagos atrasados y adicionales a 600 trabajadores. Las fallas más comunes fueron la carencia de información sobre las finanzas, decisiones arbitrarias, la imposición de medidas disciplinarias sin base legal, falta de asambleas de socios, empleo de trabajadores por más de seis meses sin integrarlos a la cooperativa –como lo prescribe la ley– y la carencia de políticas de programas educativos para los socios.²

² Ver *Últimas Noticias*, 20 de diciembre 2005.

EMPRESAS DE PRODUCCIÓN SOCIAL

Con las *Empresas de Producción Social* (EPS), Venezuela en el 2005 creó una nueva forma de empresa, que inicialmente debía ser el fundamento de la transición hacia un modelo socialista de producción. Lo central no es la forma de propiedad, sino el actuar de las empresas: cooperativas, empresas del Estado, empresas mixtas y aún empresas privadas pueden ser EPS. Las EPS tienen que valorar más el beneficio social que el beneficio privado y, orientar su producción hacia las necesidades sociales en vez de guiarlas a lógicas de comercialización y de acumulación capitalista. Además, en octubre 2005 Chávez decretó que los recursos producidos por empresas del Estado, tienen que satisfacer primero la demanda interna, antes de que éstas exporten.

En una EPS el cargo de un empleado no le debe dar ningún privilegio frente a otros y la organización interna del trabajo debe seguir un modelo democrático. Hay rotación de actividades, la enajenación en el proceso de producción debe ser suprimida gradualmente. Una EPS debe también integrarse con las comunidades en su alrededor a través de los *Consejos Comunales* e invertir una parte de sus ganancias (por lo menos entre el 10 y 15%) en lo social y la infraestructura de las comunidades; deben fomentar y apoyar a cooperativas, especialmente río (aguas) arriba y río (aguas) abajo, integrando cadenas productivas. Su contabilidad debe ser transparente y pública (EL TROUDI, 2006, p. 91-128).

En julio del 2005, Chávez definió las EPS como el centro de un viraje económico y social de la Venezuela que construye el socialismo del siglo XXI.³ Y las empresas del Estado deben fungir como punta de lanza promoviendo las EPS. Al ser EPS, las empresas gozan de varias ventajas, por ejemplo, prioridad en licitaciones de Estado.

Sin embargo, no hay definición oficial y universalmente válida de que es una EPS. Diferentes instituciones del Estado manejan diferentes conceptos de qué es una EPS; como consecuencia, por ejemplo, las EPS formadas por o con la ayuda de PdVSA, tienen que pagar una porción de sus beneficios a un fondo de PdVSA; del cual PdVSA financia proyectos en las comunidades. Un modelo que se parece más a un impuesto adicional, que a una integración con las comunidades.

³ Ver *Rebelión*, 20 de julio 2005.

Algunas de las tomas se dieron como consecuencia de la invitación, más o menos, abierta por el presidente y el gobierno. A finales de julio de 2005, Chávez parcialmente leyó una lista de empresas que ya estaban en proceso de expropiación; una más, de 136 empresas que estaban evaluándose para ser expropiadas, otra de empresas cerradas y finalmente empresas parcialmente paralizadas. En total 1,149 empresas. Chávez hizo un llamado al pueblo de reportar otras empresas cerradas y ofreció a los propietarios de empresas parcialmente paralizadas apoyo estatal para su reactivación. Preciso que en aquellos casos en los cuales los empresarios no quieran reabrir las, habría que expropiarlas. La Ministra del Trabajo María Cristina Iglesias llamó a los sindicatos, trabajadores y ex-trabajadores de estas empresas de recuperarlas.⁵ La UNT (Unión Nacional de Trabajadores) declaró apoyar la postura del gobierno y anunció la ocupación de 800 empresas cerradas.⁶

Sin embargo fueron tomadas sólo una pequeña parte de las empresas y el número total de empresas tomadas, expropiadas y adquiridas por el Estado se quedó por debajo de las 800 anunciadas. Esto indica una cierta contradicción entre la demanda correcta de darle prioridad a procesos desde abajo y, el nivel existente de organización e iniciativa de los trabajadores. Evidentemente, ni los trabajadores tienen la fuerza, el nivel de organización y de conciencia para hacer las tomas; ni las instituciones estatales tenían suficiente compromiso para promover y apoyar las medidas anunciadas. Ni siquiera la UNT siguió su propia política anunciada de toma de 800 empresas.

Sin la presión desde abajo, las iniciativas del presidente se quedarían trabadas en el aparato burocrático. Más allá de las empresas ya expropiadas o adquiridas por el Estado, el número de empresas tomadas en Venezuela a mediados de 2007 está alrededor de 40. No existe una política amplia y sistemática para las expropiaciones en el sector productivo. La mayoría de las expropiaciones son el resultado de la presión a instituciones del Estado por ocupaciones y movilizaciones.

Como demuestra el caso recién (reciente) de Sanitarios Maracay, las contradicciones y puntos de vista diferentes atraviesan el gobierno y sus instituciones, así como a los trabajadores. La empresa, propiedad del empresario opositor Álvaro Pocaterra, fue cerrada por su dueño el 14 de noviembre de 2006 y ocupada el mismo día por 550 trabajadores.⁷

⁵ *Op. cit.*, 17 de julio 2005

⁶ Ver *Resumen Latinoamericano*, 15 de julio 2005.

⁷ Ver *Aporrea*, 19 de noviembre 2006.

a implementarse desde principios del 2005, principalmente en empresas del Estado y de propiedad mixta (Estado/cooperativas), de diferentes formas y alcances.

Desde las filas de la UNT en el 2005 se presentó a la Asamblea Nacional una propuesta de ley respecto a la cogestión que fue retirada después de fuertes críticas. SintrAlcasa, el sindicato de la fábrica de aluminio, criticó a la ley por quedar detrás de los avances pasados (pactados) en Alcas (Alcasa). La propuesta contemplaba el acceso de los trabajadores a los documentos operacionales, legales y financieros de la empresa para garantizar un nivel de operaciones adecuado y eficiente. Y fijaba que la asamblea de propietarios y la junta directiva de las empresas en cogestión tenían que conformarse mínimo por un 50% de trabajadores y funcionar como órganos colectivos de toma de decisiones. Mientras el Estado tenía que apoyar a las empresas en cogestión, para evitar que produzcan pérdidas durante el proceso de implementación de ésta.¹⁰ Está prevista otra ley concerniente a empresas públicas, y empresas con una participación pública, pero también ésta pueda ser aplicada a empresas 100% privadas, siempre y cuando éstas sean declaradas empresas de “utilidad pública” o de “interés social”. A falta de una ley y los diferentes modelos de cogestión aplicados, se produjeron conflictos en algunas empresas. Aunque no obstante, los problemas y desventajas que puedan surgir, tales como: la falta de un marco jurídico hace posible que surjan, de manera orgánica, diferentes modelos – correspondiendo a nivel de lucha y de conciencia de los trabajadores y de las situaciones específicas – que de otra forma serían víctimas de la regulación estatal.

Obviamente el proceso de democratización de estructuras empresariales no se da con armonía y en numerosas empresas del Estado no hay cogestión. Esto es manifiesto en la compañía petrolera del Estado PdVSA, en la cual muchos trabajadores pidieron la cogestión, que hasta la fecha fue negada por la gerencia, bajo el argumento de la importancia estratégica de PdVSA¹¹. Conflictos sobre la introducción de un modelo de cogestión y problemas en su aplicación, de igual manera se dan en las fábricas expropiadas, ocupadas anteriormente. Ejemplo de ello, son las

¹⁰ Ver ABN, 4 de Mayo 2005; *El Universal*, 3 de mayo 2005.

¹¹ Lo que tampoco es muy lógico visto que cuando en 2002/2003 hubo el *paro-sabotaje petrolero* con el cual la oposición intentó tumbar al gobierno de Chávez, fueron los trabajadores que pusieron a funcionar otra vez toda la empresa a nivel nacional bajo su control. Así que más bien el control obrero parece ser una garantía más confiable.

juntarlos todos a causa de diferentes turnos o hasta por rivalidades. Mientras tanto las corrientes sindicales de izquierda ganaron en las elecciones sindicales internas los departamentos productivos; los antiguos representantes sindicales, comprometidos con prácticas de vieja índole (con nexos con el ex partido de gobierno Acción Democrática, negociando puestos de trabajo, cuotas de negocios, corrupción y venta ilegal de aluminio) ganaron la mayoría en varios departamentos administrativos.

En la fábrica se montó un centro de formación política e ideológica. Alcasa se convirtió en una EPS y ha comenzado a apoyar la construcción de cooperativas para la elaboración aguas abajo del aluminio producido. En noviembre del 2005, la asamblea de los accionistas eligió una nueva junta directiva. De los cinco miembros de esta junta (aparte de Carlos Lanz) tres vienen de la CVG y dos son empleados de Alcasa. Entre los suplentes de los miembros de la junta directiva, hay también dos miembros de la población local organizada; un profesor de la Universidad Bolivariana y un economista.¹²

En julio de 2006, Carlos Lanz puso su cargo de director de fábrica a elección y obtuvo 1,800 de 1,920 votos. El plan era también reestructurar la junta directiva de la fábrica, de tal manera que de los siete miembros, cuatro vendrían de los trabajadores, dos de la CVG o el Estado y uno de las comunidades locales organizadas. La idea detrás de este modelo es que la planta no se considere ni propiedad del Estado, ni de los trabajadores, sino de verdad "propiedad del pueblo". De allí la lógica de la participación de la población local en la estructura administrativa.

Los que pensaban que Alcasa estuviese condenada al fracaso, tuvieron que rectificar. La producción aumentó en seguida 11%.¹³ Además Alcasa en el 2005-2006 pagó toda la deuda acumulada en salarios y pensiones caídas.

A finales de 2006 Alcasa y el sindicato de los Alcasianos, Sintralcasa, firmaron un nuevo contrato colectivo, aprobado por el gobierno y las cortes en febrero del 2007. El contrato contemplaba la construcción de consejos de trabajadores en la fábrica. Según el plan, varios departamentos de la empresa tenían que presentar sus ideas, bajo las cuales los mismos trabajadores desarrollarían o escogerían su modelo.¹⁴ También se inició, un debate sobre la reducción del día de

¹² Ver *Prensa Alcasa*, 24 de noviembre 2005.

¹³ Ver http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america, de agosto el 19 de 2005.

¹⁴ Ver *Prensa Alcasa*, 22 de febrero 2007.

los trabajadores organizados a favor de la cogestión y el presidente, se habían roto. El presidente inició una política para sacar las cooperativas de Alcasa y pasó la coordinación de cooperativas de una gerencia manejada por trabajadores a favor, de la cogestión a la Gerencia de Logística que persiste como gerencia ocupada por redes de corrupción. Además, el presidente trató de evitar la concreción de los proyectos sociales elaborados por los trabajadores en 4 comunidades (por ejemplo, reparación de escuelas), que tendrían que ser financiados por el fondo social de Alcasa, creado por orden de la CVG.

Vista la centralidad de Alcasa en Guayana y el papel protagónico de los trabajadores de la siderúrgica Sidor (con la cual los núcleos de trabajadores organizados de Alcasa tienen mucho contacto), llevó presidente al Chávez a nacionalizar la empresa, en contra de la voluntad y de los intereses del gobernador del Estado de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, representante de la derecha del proceso bolivariano. Hay que suponer, que detrás hay intereses regionales muy fuertes al impedir un papel protagónico de los trabajadores en Bolívar. Los trabajadores organizados a favor de la cogestión en Alcasa han desarrollado un amplio trabajo en la región. Están coordinados con los trabajadores de otras fábricas, sindicatos de maestros, *Consejos Comunales*, organizaciones estudiantiles, cooperativas y EPS. Han apoyado de manera intensa la lucha de los trabajadores de Sidor para la nacionalización y, desde la nacionalización, apoyan a los trabajadores de Sidor en desarrollar un modelo de cogestión. Bajo la mesa, el gobernador Rangel, como el presidente de Alcasa y otros, actúan en contra de las políticas oficiales y directivas del presidente Chávez y del gobierno, para mantener el control de la región.

INVEPAL, DE BUQUE INSIGNIA A OVEJA NEGRA

El 19 de enero del 2005, el presidente Chávez expropió mediante un decreto, la propiedad completa de la papelera Venepal (renombrada Industria Venezolana Endógena del Papel, Invepal). La cual en algún tiempo fue la papelera más grande de América Latina, ésta fue llevada intencionalmente a la bancarrota por sus dueños anteriores. En los noventa malversaron y redireccionaron un crédito de 10 millones de dólares, en vez de invertirlo en la fábrica. Varios acuerdos fueron firmados entre los trabajadores y los dueños anteriores, mismos que éstos últimos no respetaron. Así, los trabajadores ocuparon la fábrica varias veces. Los conflictos centrales se dieron en la planta de Morón, en el Estado de

probablemente consecuencia de que los trabajadores con la construcción de la cooperativa Covinpa, se volvieron dueños, mientras el sindicato fue disuelto.

Edgar Peña al final fue revocado como presidente por parte de la asamblea de trabajadores, a principios del 2006; después de que la Contraloría Social de los trabajadores (revisión de finanzas por parte de la sociedad organizada), descubrió que la junta directiva había contratado a 161 trabajadores en la fábrica de Maracay bajo condiciones mucho peores a las de los cooperativistas, y sin integrarlos a la cooperativa después de seis meses de trabajo como está previsto por la ley. Se supo también que 120 de ellos habían sido despedidos otra vez en noviembre del 2005. El Ministerio de industria ligera y comercio (MILCO) y otras instituciones estatales intentaron rechazar la decisión de los cooperativistas de revocar a Peña, pero la cooperativa al final se impuso. Una revisión de las finanzas por parte del MILCO en el 2006, mostró gastos no documentados de 1,700 millones de Bolívares (alrededor de 800,000 dólares). De acuerdo al reporte oficial de investigación, no hubo desvío de fondos, sino sólo “desorden administrativo”.¹⁹ Sin embargo, algunos trabajadores sospechan que los desvíos de fondos fueron cubiertos porque empleados gubernamentales, al igual que representantes de la cooperativa, son responsables de las pérdidas.

En abril 2006 se nombró una nueva junta directiva. María Cristina Iglesias para ese momento, ministra del MILCO, fue nombrada presidenta de la fábrica. Aunque esta medida era temporal, hasta la conclusión de la investigación interna, duró aproximadamente dos años. En la nueva junta directiva sólo dos de los cinco miembros eran trabajadores y la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa fue restringida aún más. Nuevamente la justificación es que, primero se tiene que llegar a que la fábrica opere bien, antes de tomar otras medidas. La “traición” desde sus propias filas, la tardanza en reconocer los problemas y la incapacidad de encontrar una solución propia y, la participación aún más limitada, crearon un clima de resignación entre los trabajadores. Sin embargo, como cooperativistas –aunque divididos entre sí– ya retomaron hace mucho el debate sobre cuál modelo tomar para Invepal. Una parte de ellos está involucrada en los debates del Frente Revolucionario de Trabajadores de Empresas en Cogestión y Ocupadas (FRETECO), así que lo más probable parece que se vaya en dirección de algún modelo de fábrica socialista.

¹⁹ Ver *El Universal*, 15 de agosto 2006.

decisiones importantes que afectan la fábrica se iban a tomar en la asamblea semanal de la fábrica. Los trabajadores aceptaron el modelo de propiedad mixta, aunque en un primer momento lo rechazaron considerándolo también un modelo capitalista.

Aún así, no fue hasta diciembre del 2005 que los trabajadores de Inveval recibieron oficialmente las llaves de la planta. Como parte de la gestión, el Estado puso 6 mil millones de Bolívares para financiar la re-apertura de la fábrica. Hasta octubre del 2006 se recuperó la infraestructura completa y parte de la maquinaria e Inveval entonces, finalmente reasumió el trabajo. Aunque a causa de que la fundidora perteneciente a la fábrica se encuentra en otro lado y no fue expropiada, ésta sigue en manos del antiguo dueño Pietri y no puede ser usada por la nueva Inveval. Así, los trabajadores se dedican a trabajos de mantenimiento de válvulas industriales, produciendo un número reducido de válvulas nuevas en otra fundidora privada. Los trabajadores de Inveval buscan una solución a esta situación, ya sea a través de la expropiación de la fundidora, anteriormente parte de la empresa, o a través de la compra de otra.

La asamblea de trabajadores de Inveval decidió, desde el inicio, un aumento salarial y e introducir la jornada laboral de 7 horas. A partir de la 16:00 hrs, varias misiones educativas entran a la fábrica y dan a los trabajadores, así como también a los habitantes de las comunidades aledañas, cursos de primaria y secundaria. Algunos trabajadores toman curso por las tardes en universidades. En total 37 de 63 trabajadores están en formación educativa.

Durante años, los trabajadores de Inveval tuvieron que luchar contra el burocratismo de PdVSA para conseguir que ésta les comprara válvulas y les encargara la reparación y mantenimiento de una parte de las válvulas que poseen. Hubo conflictos con el MILCO alrededor de la materia prima y sigue una lucha contra la gerencia de la Empresa de Producción Social (ATEPS) de Intevep, que intenta apoderarse de la empresa. Mientras tanto, los trabajadores altamente politizados rechazan ser copropietarios de la fábrica, evaluando la transformación que hubo de los trabajadores propietarios como un error.

La existencia de una junta directiva conformada por cinco miembros generó descontento. La separación de las áreas de trabajo y de decisión aumentó la apatía entre los trabajadores y, un aislamiento de la junta directiva. Además, según comentaron los trabajadores, los dos representantes del Estado no participaron casi nunca en las juntas. Así,

programa *Fábrica adentro*, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio (Mppilco, anteriormente MILCO). Para tener acceso a este programa, los empresarios tienen que llegar a un acuerdo con sus trabajadores sobre la implementación de un modelo de cogestión, que le dé a los trabajadores participación en la administración, la junta directiva y las ganancias de la empresa. Además, la empresa tiene que transferir una parte de sus ganancias (5-15%) a un Fondo de Transformación Industrial; no se le permite despedir trabajadores y debe crear nuevos empleos.

La iniciativa es bastante exitosa. Hasta finales del 2006, 1,520 empresas habían entrado al programa; de las cuales 847 ya tenían sus proyectos aprobados, habían recibido créditos y empezado a implementar los acuerdos. De estas empresas, 69 se encontraban cerradas anteriormente, mientras las demás aumentaron su capacidad de producción. En total presentaron 268 proyectos nuevos para la sustitución de importaciones.²¹

Sin embargo, aquí se evidencia también el dilema de la cogestión. Mientras muchos empresarios y, en gran parte también, la administración de las empresas del Estado ve la cogestión en la lógica de un pacto social para evitar conflictos, crear puestos de trabajo y aumentar la producción (UNT), muchos trabajadores, y una parte de las instituciones, la ven como un paso a una transformación de futuro control obrero de las empresas en el marco de un modelo socialista.²²

Más allá de esto, la calidad de la cogestión varía de fábrica en fábrica. En algunas empresas consiste simplemente en modelos que traspasan una parte de la propiedad a los trabajadores, mediante cuotas individuales de propiedad o a través de la participación minoritaria en una cooperativa de trabajadores. Eso arrastra los trabajadores a una lógica empresarial sin darles una participación real en la toma de decisiones. Así que los trabajadores no tienen ninguna posibilidad de decidir sobre el trabajo o la producción, mientras al mismo tiempo comparten con el dueño principal el interés de producir más valor agregado. Contar casos de cogestión como éste, infla los números y las estadísticas; aunque al final trabaja en contra de una transformación de las relaciones de producción en un sentido socialista.

²¹ Ver *VTV*, 20 de diciembre 2006.

²² Ver *Rebelión*, 26 de abril 2005.

de uniformes. Es la garantía, en una primera etapa, de la viabilidad de todas estas unidades productivas.²³

El desarrollo endógeno en Venezuela plantea el uso sustentable de los recursos naturales. Así, por ejemplo, las cooperativas agrícolas formadas en la *Misión Vuelvan Caras* se basan en la agricultura biológica. La *Misión Vuelvan Caras*, que fue lanzada en marzo 2004, surge en el marco del debate sobre desarrollo endógeno. La meta de la misión fue la de formar, desde el punto de vista técnico-laboral y político, hasta finales del 2007, 1.2 millones de personas de los sectores más desfavorecidos del país y promover la formación de cooperativas. El *Instituto Nacional de Cooperación Educativa* (INCE) ofrece formación laboral en los sectores de construcción, turismo, agricultura, gastronomía, servicios e industria. Adicionalmente a finales de 2006 se inauguró la *Misión Vuelvan Caras Jóvenes*, dirigida a jóvenes de entre 15 y 28 años. Los 72 cursos diferentes duran en promedio dos meses más que en la *Misión Vuelvan Caras*, porque incluyen una fase de orientación laboral.

La *Misión Vuelvan Caras* se dirige principalmente a adultos desempleados sin formación laboral. La participación de mujeres durante los últimos años ha sido entre 62 y 65%. Los participantes de la misión recibían una pequeña beca durante los cursos, que en su mayoría duraban seis meses (algunos eran más largos), para así asegurar su participación. El monto exacto dependía del estatus del participante.

Con los participantes que lo deseaban, se formaban cooperativas que recibían créditos y apoyo técnico. Trabajadores de empresas recuperadas, o que por otra razón asumieron el control de su empresa, pasaron por formaciones en el marco de la *Misión Vuelvan Caras*. La formación se solía hacer en los *Núcleos de Desarrollo Endógeno*, de los cuales hay 125 en todo el país.²⁴ En los *Nudes* se forman redes cooperativas, las cuales ofrecen a las comunidades la oportunidad de aprovechar el potencial local y asumir la planificación y el desarrollo de los proyectos.

²³ <http://www.minci.gov.ve/pagina/3/5835/completa.html>.

²⁴ Ver *MINCI*, 26 de Enero 2007.

²⁵ Ver *ABN*, 13 de septiembre 2005.

las comunidades y políticas sociales de su área.

La autonomía administrativa y económica de las empresas del Estado (petróleo, petroquímica, minería, aluminio, electricidad, comunicaciones, aerolíneas y agricultura) fue abolida, las empresas viven un proceso de integración, según categorías estratégicas y pasarán a una planificación central en función de toda la sociedad.

Mientras tanto varias fábricas, empresas del Estado y ministerios presentaron diferentes propuestas; el Mppilco organizó también varios encuentros con trabajadores para discutir posibles modelos.

La forma de “propiedad social” de las fábricas socialistas sería definida por la reforma constitucional, rechazada en diciembre 2007, de dos formas: como directa, cuando es administrada por el pueblo (Consejos Comunales, Comunas y Ciudades Comunales) e indirecta cuando es administrada por el Estado. Los bienes producidos no deberían ser considerados mercancías vendidas a quien puede pagarlas, sino bienes que son transferidos a quienes los necesitan, basado en un intercambio continuo con la meta de satisfacer las necesidades de la sociedad. Las empresas socialistas deberían también estar monitoreando la calidad de sus productos y tratar de mejorarla. Los trabajadores de fábricas socialistas son propuestos por los Consejos Comunales de la zona. El Estado pone el personal especializado hasta que la administración sea pasada paso por paso a los trabajadores y las comunidades.

Como parte del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 estaba planificado abrir más de 200 fábricas socialistas hasta finales del 2008: 88 en el sector de alimentos, 12 de productos químicos, 48 produciendo maquinarias y herramientas, 8 de equipos y materiales eléctricos (computadoras, celulares y otros), 10 para productos de plástico, vidrio y neumáticos, 10 fábricas textiles, 8 empresas de transporte, 4 constructoras y tres empresas de reciclaje. La mayoría son construidas por Bielorrusia, China, Irán, Rusia y Argentina, incluyen transferencia de tecnología y conocimiento. La idea es también de fortalecer la independencia y soberanía de Venezuela construyendo una red nacional de producción que reduzca importaciones y la dependencia al extranjero.

CONCLUSIONES

Venezuela implementa una variedad de medidas para promover cambios estructurales en la economía y alcanzar una democratización de las relaciones de propiedad, trabajo y producción. Algunas buscan ir

carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

Artículo 118. El Estado promoverá y protegerá las asociaciones solidarias, corporaciones y cooperativas, en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, microempresas, empresas comunitarias y demás formas asociativas destinadas a mejorar la economía popular.

Artículo 308. El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno.

AZZELLINI, D. The solidarity economy, collective forms of ownership, expropriation and workers co- and self-management in Venezuela. *Revista ORG & DEMO* (Marília), v. 10, n.1/2, p. 5-30, jan./dez., 2009.

ABSTRACT: The essay resumes and analyzes different organizational efforts of the Bolivarian government in Venezuela to achieve a democratization of property and management of means of production. The different approaches adopted since 2000, first a strengthening of cooperatives, then the creation of Social production companies (EPS) and finally the Socialist Enterprises as well as the concept of endogenous development, normative orientation of production organization and state job training are described and critically analyzed. Regarding the internal organization of production sites models of Co-management, self-management and workers control are presented and then critically analyzed concerning successes and failures by resuming field work done about three factories: The Aluminium factory Alcasa, the paper factory Invepal and the valves factory Inveval.

KEYWORDS: solidarity economy; self-management; Venezuela.